

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, dos (2) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio

MAGISTRADA PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76111-33-33-002-2018-00005-01
DEMANDANTE:	LUIS FELIPE CRISTANCHO LOZANO Apoderado: Oscar Gerardo Torres <a href="mailto:Abogadooscartorres@gmail.com">Abogadooscartorres@gmail.com</a>
DEMANDADO:	MINEDUCACION-FOMAG <a href="mailto:notificacionesjudiciales@minieducación.gov.co">notificacionesjudiciales@minieducación.gov.co</a> MUNICIPIO DE TULUÁ <a href="mailto:Juridico@tulua.gov.co">Juridico@tulua.gov.co</a> FIDUPREVISORA <a href="mailto:procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co">procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co</a>
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – REVOCA RECHAZO DE LA DEMANDA. EFECTO SUSPENSIVO DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE FÍSICO AL JUZGADO DE ORIGEN

OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve el recurso apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio proferido en la audiencia inicial de 10 de diciembre de 2019 por el Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga, mediante el cual declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e ineptitud sustantiva de la demanda (fl. 327).

I. ANTECEDENTES

1. Las pretensiones.

El señor Luis Felipe Cristancho Lozano solicitó la nulidad del oficio nro. 310-044-026-2468 del 3 de agosto de 2016, suscrito por un profesional universitario de la Oficina Jurídica de la secretaría de educación municipal de Tuluá, por el cual se respondió su petición de reajuste de su pensión ordinaria de jubilación y descuentos por salud.

2. La providencia apelada.

El Juzgado declaró probadas, de oficio, las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva del Municipio de Tuluá y la FUDUPREVISORA, y la de ineptitud sustancial de la demanda (fl. 237).

Sustentó la decisión con el siguiente argumento:

El MUNICIPIO DE TULUÁ no es la entidad competente para resolver la solicitud elevada por el demandante y por ello no efectuó un pronunciamiento de fondo frente a las pretensiones, lo cual conllevaría a proferir una decisión inhibitoria. En tal virtud está probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de esa entidad territorial comoquiera que dicho ente no tiene la facultad para pronunciarse sobre las solicitudes prestacionales deprecadas por el accionante.

Con los mismos argumentos declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la FIDUPREVISORA.



Adicionalmente señaló que sería del caso continuar el proceso únicamente en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN — FOMAG, pero, el acto demandado no fue proferido por dicha entidad, quedando el juzgado sin actos a los que se deba efectuar control de legalidad.

Argumentó en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2831 de 2005 no puede entenderse que el acto demandado fue proferido por el Ministerio de Educación – FOMAG comoquiera que no fue suscrito por el secretario de educación del ente territorial.

### **3. La apelación.**

La parte actora apeló la decisión porque el acto demandado fue expedido por un funcionario de la Secretaria de Educación, dependencia encargada de resolver las solicitudes que en materia pensional se eleven a la NACION-MINISTERIO DE EDUCACION-FOMAG actúa a través de ésta (Fl. 237).

## **II. CONSIDERACIONES**

### **4. Competencia.**

De conformidad con el artículo 328<sup>1</sup> del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306<sup>2</sup> del CPACA, se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

### **5. Problema jurídico.**

Corresponde a la instancia resolver la siguiente cuestión:

¿El oficio por el cual un profesional universitario de la Secretaria de Educación de Tuluá se pronunció sobre la petición de reliquidación y ajuste de la pensión ordinaria de jubilación del actor es un acto administrativo definitivo y de fondo que permite vincular procesalmente a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FOMAG para su control judicial?

### **6. Tesis de la sala.**

Se revocará la decisión de declarar probada la excepción de inepta demanda por cuanto el acto administrativo contiene una decisión de fondo de la Secretaría de Educación del Municipio de Tuluá dentro de un trámite administrativo que por virtud de la ley debe realizar esa dependencia en nombre del MINISTERIO DE EDUCACION-FOMAG.

---

<sup>1</sup> ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

<sup>2</sup> ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

## 7. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 180 del CPACA en la audiencia inicial, se resolverán las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.

El artículo 100 de la Ley 1564 de 2012<sup>3</sup>, enlistó las excepciones previas dentro de las cuales en su numeral 5 se encuentra la denominada “*Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones*” norma a la cual se acude por remisión del artículo 306 del CPACA.

La finalidad de las excepciones previas, es la de conjurar vicios formales en procura de evitar decisiones inhibitorias o, dada la entidad de las falencias, impedir que continúe el curso del proceso *ab initio*, ya que no sería posible, ante su existencia, llegar a la sentencia por sustracción de materia.<sup>4</sup>

Conforme con lo expuesto es claro que, en la audiencia inicial al juez le corresponde decidir sobre las excepciones que tengan el carácter de previas las cuales están mencionadas en el artículo 100<sup>5</sup> del CGP, esto es, aquellas que se encaminen a atacar la forma del proceso, por existir alguna inconsistencia de tipo procedimental en la manera como fue presentada la demanda, sin enervar la pretensión, pero con la posibilidad de dar lugar a la terminación o suspensión de aquel, motivo por el cual deben ser resueltas en la primera audiencia, bien sea las propuestas por el extremo pasivo **o de oficio por el juez**.

Adicional a estas, también podrán resolverse, como lo señala el citado artículo 180 del CPACA, las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, que son de naturaleza mixta, por lo que a pesar de ser algunas estrictamente perentorias o de fondo, por estar orientadas a atacar la pretensión, se les da el trámite de previas y en caso de que prosperen tienen la virtud de terminar el proceso.

### • DE LA EXCEPCIÓN PREVIA DE INEPTITUD DE LA DEMANDA.

El Consejo de Estado – Sección Segunda reconoce la “ineptitud de la demanda por la falta de cualquiera de los requisitos formales” o “por la indebida acumulación de pretensiones” como una excepción previa siempre que los defectos encontrados no configuren ninguna de las otras excepciones preestablecidas en la ley y adoptar medidas de saneamiento<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

<sup>4</sup> CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A - Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN - Bogotá, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil quince (2015) - Radicación número: Acto25000-23-25-000-2004-00247-01(1886-12) demandante: JOSE AGUSTÍN MORA TORRES - Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL -UAEAC-, y COMO LITISCONSORTE NECESARIO AVIANCA S.A.

<sup>5</sup> El Código General del Proceso, en el artículo 100, dispone: «EXCEPCIONES PREVIAS. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:

1. Falta de jurisdicción o de competencia.

2. Compromiso o cláusula compromisoria.

3. Inexistencia del demandante o del demandado.

4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.

5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.

6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.

7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.

8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.

9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.

10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.

11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada».

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia de 21 de abril de 2016, Consejero Ponente: William Hernández Gómez, Rad. 47-001-23-33-000-2013-00171-01 (1416-2014).

Lo anterior fue reiterado en reciente providencia del 25 de abril de 2019, en la cual se recordó que es viable proponer y declarar la excepción previa de “ineptitud de la demanda” cuando se trata de la falta de requisitos formales de la demanda e indebida acumulación de pretensiones<sup>7</sup>.

- **LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEFINITIVOS.**

El artículo 43 del CPACA define:

**“Artículo 43. Actos definitivos.** Son actos definitivos los que **decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación**”.  
(negrilla fuera del texto)

Respecto a la noción de acto administrativo, la Corte Constitucional, en Sentencia C-1436 de 25 de octubre de 2001<sup>8</sup>, sostuvo:

*“El acto administrativo definido como la manifestación de la voluntad de la Administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los administrados”.*

Por su parte el Consejo de Estado, en providencia del 4 de marzo de 2010<sup>9</sup>, señaló:

*“El acto administrativo se entiende, entre otras perspectivas, como una decisión adoptada o expedida en función administrativa a través de la cual la autoridad crea, modifica o extingue una posición de una persona o conjunto de personas determinadas o indeterminadas frente a una norma de derecho (situación jurídica). El acto singular o particular no necesariamente tiene un destinatario único, por cuanto puede ir dirigido tanto a una persona como a un grupo determinado de personas; en tanto que el acto general se expide siempre para un grupo indeterminado de personas a quienes se les crea, modifica o extingue una situación jurídica, dependiendo de las conductas o roles que ellas mismas asuman”.*

Y en providencia de 2015<sup>10</sup> acotó: *“no todo acto de la Administración tiene la vocación o cualidad de producir efectos jurídicos, en este sentido, se diferencian los actos administrativos, que sí gozan de tal condición, de los actos de la Administración, entendidos como meramente declarativos, es decir, que son manifestaciones unilaterales de las autoridades administrativas que no producen efectos jurídicos a los administrados, ni a favor ni en contra”.*

En reciente pronunciamiento de fecha 27 de mayo de 2019, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente<sup>11</sup>:

**“Actos susceptibles de control.**

<sup>7</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 25 de abril de 2019, Consejero Ponente: WILLIAM HERNANDEZ GÓMEZ. Rad: 25000-23-42-000-2016-03390-01(4082-17)

<sup>8</sup> MP. Alfredo Beltrán Sierra.

<sup>9</sup> Sentencia de 4 de marzo de 2010, Expediente: 2003-00360-01(3875-03), Sección Segunda, Subsección “A”, Magistrado ponente: Dr. Alfonso Vargas Rincón.

<sup>10</sup> Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de junio de 2015, Rad. 2011-00271-00, MP. María Elizabeth García González.

<sup>11</sup> **Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Sentencia del 27 de mayo de 2019. Rad. 05001-23-33-000-2016-01960-01(4878-16).**

*El acto administrativo, constituye la expresión de voluntad unilateral de la Administración destinada a producir efectos en el mundo jurídico, y que dependiendo el ámbito en que éstos se extienden, pueden ser de contenido general o particular.*

*Los actos particulares, se distinguen claramente porque los efectos proseguidos a partir de su expedición son verificables en una situación concreta que se crea, se modifica o se extingue, de suerte que los mandatos contenidos en él solo afectan al interesado.*

*De lo anterior, se colige **que solo aquellos actos que produzcan efectos tienen trascendencia material para verificarse su contenido en sede gubernativa y judicial** en uso de los mecanismos previstos por el legislador, de ahí que, normativamente **reciban el calificativo de actos definitivos al decidir la actuación de manera directa o indirecta, y como tal, son los únicos pasibles de ser acusables.***.(negrillas del Tribunal)

Tal como se ha señalado en los precedentes anteriores, son enjuiciables ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa los actos administrativos que ponen fin a la actuación o que hacen imposible la continuidad de los mismos.

#### • LAS SECRETARÍAS DE EDUCACION Y EL FOMAG.

El artículo 9 de la ley 91 de 1989 establece: *“Las Prestaciones Sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán reconocidas por la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional, función que delegará de tal manera que se realice en las entidades territoriales.”.*

La Ley 962 de 2005, a través de la cual “se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios”, en su artículo 56 dispuso:

“Artículo 56. Racionalización de trámites en materia del fondo de prestaciones sociales del magisterio. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, **mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo**, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial”.

El Decreto 2831 de 2005, establece:

Artículo 2º. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente el estado de su trámite.

Artículo 3º. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.

Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:



1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.
2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo.
4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley.
5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a que estos se encuentren en firme.

**Parágrafo 1º. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan adoptado respecto del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.**

Parágrafo 2º. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.

## **8. caso concreto.**

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989, la entidad competente para reconocer, reliquidar y reajustar las pensiones de los docentes es el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES – FOMAG y de acuerdo a lo consagrado en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 la respuesta a dichas peticiones deberá ser proyectada por las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas o de la dependencia que haga sus veces<sup>12</sup>.

Ahora bien, en la parte final del acto acusado el profesional universitario del MUNICIPIO DE TULUÁ - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, plasmó que:

*“(…) A manera de conclusión, podemos indicar que, si bien la Secretaría de Educación Municipal de Tuluá tiene alguna participación activa en los diferentes trámites de las prestaciones sociales, esta es una competencia de la FIDUCIA DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO en cabeza hoy en día de la ENTIDAD FIDUCIARIA -FIDUPREVISORA.*

*Por lo anteriormente expuesto, no procede acceder a sus pretensiones (…)”*

Empero, lo cierto es que, en el cuerdo del oficio, el funcionario se refirió al marco normativo aplicable y las obligaciones de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACION-FOMAG respecto de las prestaciones sociales de los docentes, así como a los descuentos para salud y pensiones, temas que el peticionario le solicitó revisar para reajustar su pensión ordinaria.

---

<sup>12</sup> Al respecto, ver sentencia del 18 de enero de 2018 - Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, Consejero Ponente Gabriel Valbuena Hernández, radicación nro. 19001-33-31-000-2011-00305-01 (1733-2016).



Por tanto, el oficio si contiene una decisión de fondo a lo pedido, basada en premisas jurídicas expresas y tácitas, de tipo jurídico y fáctico, que resultan débiles y lacónicas desde el punto de vista argumentativo, pero, de todos modos, dirigidas a negar lo pedido.

Adicionalmente, si bien el acto no fue suscrito por el secretario de educación municipal sino un profesional universitario, ello no impide el control de legalidad de la decisión unilateral de la administración que allí se contiene, toda vez que, el ordenamiento jurídico impone que corresponde a la Secretaría de Educación gestionar las solicitudes en nombre de la nación-ministerio de educación-FOMAG.

En tal sentido, la falta de competencia del profesional universitario sería otro argumento de nulidad, pero no una razón para impedir el control judicial de la decisión.

Además, los principios de eficiencia, celeridad, economía, eficiencia, transparencia, que irradian la administración de justicia impiden que se obstruya el acceso al aparato jurisdiccional del Estado al demandante, quien busca que se controle la legalidad de un acto definitivo que le negó una reliquidación pensional y la devolución de unos descuentos por salud.

Finalmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en 2005<sup>13</sup>, la Corte Constitucional en 2012<sup>14</sup> y el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección “A”, en 2016<sup>15</sup>, reiteran que las prestaciones están a cargo de la Nación-Ministerio de Educación-FOMAG y por tanto, las solicitudes de reliquidación o reajuste de las mismas no se tramitan de forma independiente en la entidad territorial nominadora o en la entidad fiduciaria que administra los recursos del fondo.

En consecuencia, se;

## RESUELVE:

**PRIMERO. - REVOCAR** la decisión el auto de 10 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga a través del cual se declaró probada la excepción de ineptitud sustancial de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACION-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FOMAG, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

**SEGUNDO: DEVUÉLVASE** el expediente físico al Juzgado de Origen, cáncelse su radicación y sin costas en esta instancia<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero Ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce. 13 de diciembre de 2004. Radicación: 1614 Referencia: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Ley 91 de 1989. Administración de los recursos del Fondo. “Sin perjuicio de la ejecución presupuestal, el esquema de la ley 91 de 1989 y el contrato para efectos de la ordenación del gasto contemplan que la función administrativa se la reserva el Ministerio, de manera que los desembolsos están condicionados al reconocimiento de la prestación a través de la expedición del acto administrativo, cuyo monto se paga con cargo al patrimonio autónomo. Como se observa es un mecanismo sui generis de administración de los recursos apropiados”.

<sup>14</sup> Corte Constitucional, sentencia C-1053-2012 resolvió declarar EXEQUIBLE el artículo 6° de la Ley 91 de 1989 y EXHORTAR al Congreso de la República para que regule la composición del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales incluyendo al menos un representante de los ex docentes pensionados.

<sup>15</sup> CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “A”. Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez. 17 de noviembre de 2016. Radicación: 66001-23-33-000-2013-00190-01. Número Interno: 1520-2014. Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Demandante: Fabio Ernesto Rodríguez Díaz. Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

<sup>16</sup> Proyectó: ACH  
VoBo Secretario

RADICACIÓN  
Medio de control  
Demandante  
Demandado

: 2018-00005-01  
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
: LUIS FELIPE CRISTANCHO LOZANO  
: LA NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FOMAG



8

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES**  
Magistrada

  
**VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ**  
Magistrado

**AUSENTE CON PERMISO**  
**ZORANNY CASTILLO OTALORA**